

DE LA POBREZA ENERGÉTICA A LA ACCIÓN COLECTIVA

Un modelo sistémico para las
comunidades energéticas y
desarrollo en La Guajira Wayuu



Con el apoyo de:



© 2025

Governance Action Hub, un programa de Results for Development (R4D)

Director: Mario Picón

Líder del programa en Colombia: Jorge Flórez

Gestión de proyecto: Carlos Díaz

Doly López

Universidad de La Guajira

Carlos Martinez

José Gregorio Quintero

SER Consultores

Andrés Gómez

Universidad del Magdalena

Semillero de transición energética

Jeanine Sanchez-Ilustraciones y diseño: ALEROVISUAL SAS

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa y por escrito del Governance Action Hub.

Disclaimer:

Las opiniones, testimonios e ideas expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan necesariamente la postura oficial de Governance Action hub.

Primera edición

Digital en Colombia – 2025

www.governanceactionhub.org

CONTENIDO

Introducción

- 1.Contexto de la TEJ y pobreza energética en el territorio de La Guajira
- 2.El sistema en torno al acceso a la energía y el desarrollo comunitario en La Guajira
- 3.La implementación de comunidades energéticas Michi Kai' en Uribia
- 4.Propuestas para fortalecer el acceso a la energía y el desarrollo comunitario en La Guajira

Conclusión

4

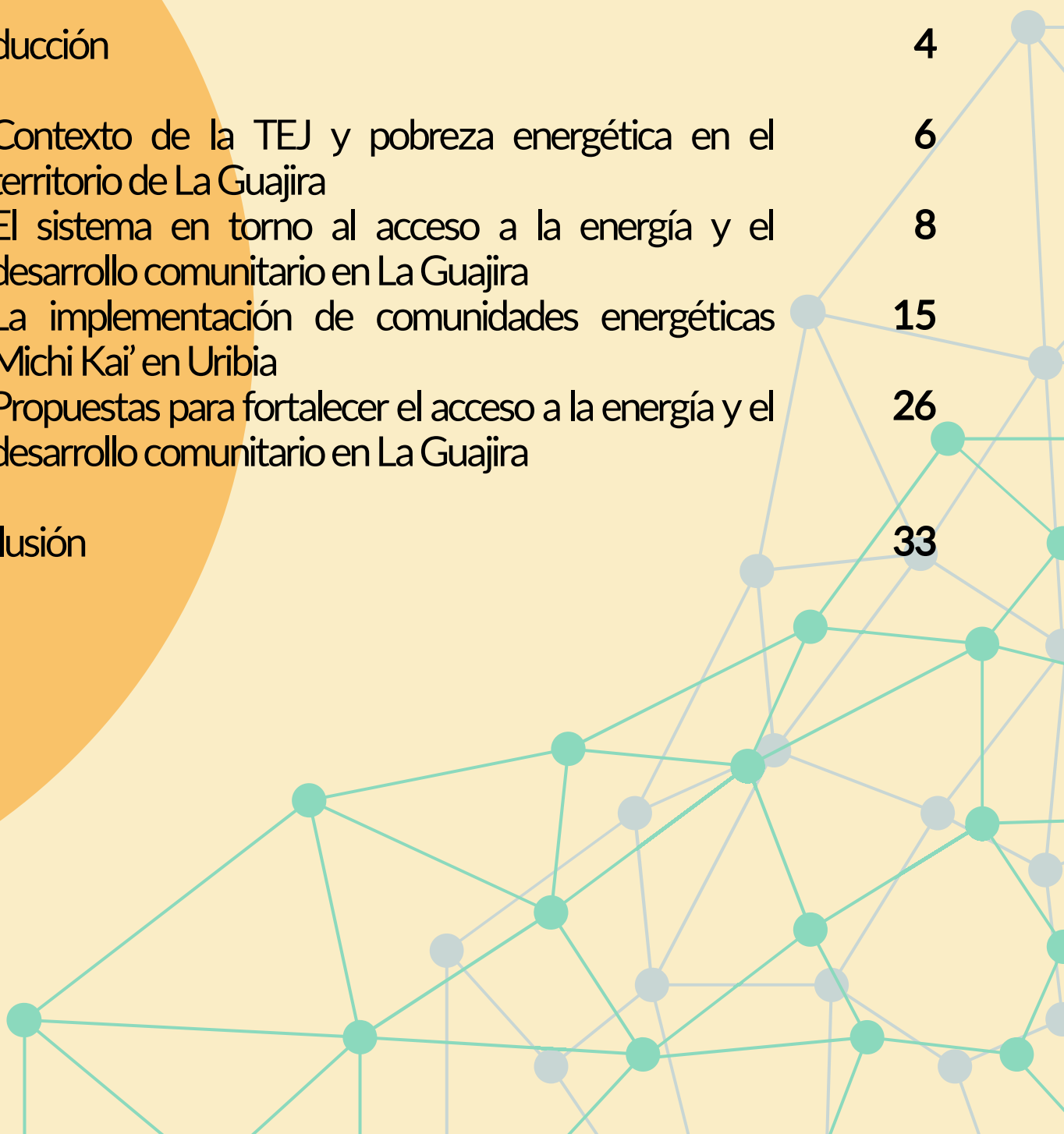
6

8

15

26

33



INTRODUCCIÓN



La Guajira es un departamento que debido a su gran potencial en combustibles fósiles, minerales, y energías renovables, ha llamado la atención de un gran número de empresas y el gobierno como un elemento crucial para la transición energética en Colombia. Pero la herencia de un modelo extractivo y la ausencia del estado han generado conflictos sociales que han limitado el desarrollo local y llevado a una vulneración sistemática de los derechos de las comunidades indígenas Wayuu en el territorio. En la última década han aumentado los esfuerzos e inversiones desde lo público, el sector privado, la cooperación internacional y la academia para avanzar en la implementación de proyectos y el desarrollo en la región.

Sin embargo, esta renovada inversión y esfuerzos aún enfrenta importantes limitaciones para permitir un cambio en las dinámicas territoriales, mejorar la oferta de servicios públicos y la garantía de derechos de grupos vulnerables como las comunidades Wayuu. Avanzar en un modelo de desarrollo que permita generar dinámicas efectivas de desarrollo territorial a la vez que se desbloquean oportunidades de inversión para el avance de la transición energética en Colombia requiere abordar este problema desde nuevas perspectivas y generar nuevas ideas y posibilidades de acción.

En un esfuerzo por contribuir a un abordaje diferente la problemática en la Guajira, implementamos un piloto orientado a generar recomendaciones desde una perspectiva sistémica que permitan aprovechar la política de comunidades energéticas y otros esfuerzos afines en el territorio en torno a la transición energética justa, con énfasis en fortalecer el desarrollo local y la resiliencia democrática de las comunidades. Nuestro abordaje parte de una caracterización de los actores y dinámicas de funcionamiento del sistema alrededor de las comunidades energéticas, el apoyo a comunidades en la Guajira y el modo en que éstas facilitan o dificultan el logro de resultados a nivel territorial.

Este piloto fue liderado por el Governance Action Hub, una iniciativa de Results for Development, en colaboración con la Universidad de La Guajira, el Semillero de Transición Energética de la Universidad del Magdalena, el Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) y Consultores SER y con el apoyo de la Royal Academy of Engineering (RAE) a través de su programa Engineering X.

Este piloto se basó en realizar actividades a dos niveles:

- Por un lado, a nivel regional buscando identificar los actores relacionados con comunidades energéticas, sus relaciones, percepciones y roles frente al tema a través de talleres realizados en La Universidad de la Guajira en Riohacha y en la comunidad Wayuu de Jiisentira en Uribia.
- Por otro lado, acompañando 2 comunidades Wayuu en Uribia, Jiisentira y Coropontain, en su proceso para convertirse en comunidades energéticas buscando comprender sus percepciones, dudas, y relacionamiento con otros actores a nivel local y regional.

Las principales hipótesis de trabajo que hemos usado en este proyecto son:

- La implementación de programas y proyectos públicos y privados en el territorio se articulan en una lógica de sistema transaccional lo que reproduce la primacía de intercambios discretos sobre la promoción de cambio en las dinámicas de relacionamiento entre actores y limita el potencial de desarrollo a nivel local. Este tema se abordará en la sección 2.
- Los actores regionales públicos, privados, y no gubernamentales son conscientes del impulso de comunidades energéticas y apoyo a las comunidades pero lo ven como un proceso aislado y delimitado por proyectos. Empezar a entender por qué ocurre esto es útil para identificar incentivos y diferencias en percepciones del proceso que desincentivan la colaboración y afectan negativamente los resultados. Este tema se aborda en la sección 3.



Link al video del **Taller**:

<https://youtu.be/Plx0NIP2lIM?si=tytgfSMvM7Zi13ka>

Es importante notar que si bien reconocemos la importancia de la consulta previa, libre e informada y el rol de esta en la defensa de los derechos de la población Wayuu, vemos que este tema ha sido ampliamente cubierto por otros ([Indepaz](#), [DeJusticia](#), [SIE](#), U. [Externado](#)). En este documento nos enfocamos en el tema del apoyo al aprovechamiento de la energía cómo base para el desarrollo socioeconómico de las comunidades Wayuu.

1. CONTEXTO DE LA TEJ Y POBREZA ENERGÉTICA EN EL TERRITORIO DE LA GUAJIRA

La Guajira es un territorio de contradicciones profundas. Mientras alberga algunos de los proyectos energéticos más ambiciosos del país, como los parques eólicos que se alzan sobre su árido paisaje, gran parte de su población vive sumida en la oscuridad. El 65% de los guajiros enfrentan pobreza energética multidimensional (IMPE, 2023), con una marcada disparidad entre zonas urbanas y rurales, donde solo el 40% cuenta con cobertura eléctrica (DANE, 2022). Datos que revelan no solo la falta de acceso a la electricidad, sino también la carencia de soluciones limpias para cocinar, iluminar sus hogares o conservar sus alimentos. Esta realidad es aún más cruda en las comunidades Wayuu, donde el abandono histórico y las barreras geográficas han perpetuado un ciclo de exclusión.

La pobreza energética no es un problema aislado; es un síntoma de desigualdades estructurales que afectan todos los aspectos de la vida. Los impactos en la salud son devastadores las infecciones respiratorias causadas por la quema de leña en espacios cerrados constituyen la segunda causa de muerte infantil en comunidades Wayuu (OPS, 2020). Esta situación se agrava por la falta de infraestructura médica adecuada, el 70% de los centros de salud en Uribia dependen de generadores diésel poco confiables para refrigerar medicamentos y vacunas (MSPS, 2023). El sistema educativo también sufre las consecuencias, el 60% de las escuelas rurales carecen de electricidad, limitando severamente las oportunidades de aprendizaje (MEN 2022). Esta brecha digital es aún más profunda: el 89% de los estudiantes en estas zonas nunca ha usado un computador (ICFES, 2022), quedando excluidos de las

herramientas educativas modernas. Las mujeres Wayuu cargan con el peso más grande de esta crisis pues dedican entre 4 y 6 horas diarias a recolectar leña y acarrear agua, tiempo que les impide desarrollar actividades económicas o participar en la vida comunitaria (ONU Mujeres 2021). Esta situación se enmarca en un contexto de pobreza extrema que afecta al 47.6% de la población Wayuu (PNUD, 2021).

La falta de electricidad también limita el desarrollo económico: sin bombeo de agua, la agricultura es casi imposible; sin refrigeración, los pescadores no pueden conservar sus capturas; y sin energía estable, los pequeños negocios no prosperan. Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de la Guajira, la mala calidad del servicio en el sistema interconectado ha generado pérdidas de alrededor de 19.000 millones de pesos debido a disminución de ventas, daños a equipos y maquinaria y daños a productos y materias primas. Esta encuesta también reveló que los empresarios han visto un aumento del 50% en la facturación del servicio, un 94% de los encuestados se muestran insatisfechos con el servicio y un 48% informan que sus reclamos no son atendidos por el prestador del servicio.

Ante este panorama, han surgido diversas iniciativas para llevar energía a La Guajira, pero no todas han sido exitosas. Los grandes proyectos estatales, aunque bienintencionados, a menudo caen en el error de imponer soluciones estandarizadas sin considerar las particularidades culturales y geográficas del territorio. Las empresas privadas, por su parte, han invertido en infraestructura, pero en muchos casos sus esfuerzos se quedan en lo asistencial, sin generar verdaderas capacidades locales. Es aquí donde las comunidades energéticas emergen como una alternativa prometedora, pues proponen un modelo en el que los propios habitantes son protagonistas de su transición energética. Algunos modelos desarrollados para la electrificación de comunidades dispersas en la Guajira son:

- El modelo de Michi Ka'i (casa del sol), una solución solar fotovoltaica diseñada para las Zonas No Interconectadas de La Guajira implementado por el IPSE
- El modelo de mini redes conectadas a infraestructura comunitaria cómo las desarrolladas por la gobernación de la Guajira, Fenoge y cooperación internacional.
- El modelo de introducción de energías renovables para el acceso al agua como las iniciativas implementadas por PNUD
- Modelos de soluciones solares individuales implementadas por Fenoge

Es innegable que diversos actores públicos, privados, comunitarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes para abordar la situación de acceso a la energía y desarrollo comunitario en la Guajira, sin embargo continuamos viendo a la región en crisis continuas y problemas de conflictividad social. La Cámara de Comercio de la Guajira analizó 93 bloqueos en la primera mitad de 2024 destacando que la mayoría de estos se debían a la mala calidad de los servicios públicos, problemas relacionados con la educación rural y conflictos entre clanes Wayuu. Está dinámica no es nueva con números similares de protestas identificadas en años recientes.

2. EL SISTEMA EN TORNO A LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA ENERGÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO EN LA GUAJIRA

Como parte del proyecto realizamos un ejercicio de mapeo de actores clave en la Guajira alrededor de comunidades energéticas identificando 50 actores clave con interés de apoyar actividades de acceso a la energía y desarrollo comunitario Wayuu. Con base en este mapeo inicial desarrollamos una serie de conversaciones con estos actores y realizamos el diálogo Multiactor “Hacia un futuro energético sostenible en La Guajira” con participación de 50 representantes de 28 organizaciones, las principales lecciones que emergieron fueron:

- **Sin articulación multiactor, el beneficio colectivo de las comunidades energéticas es limitado:** Actualmente no existen mecanismos claros de colaboración entre el sector público, privado, academia y comunidades lo que dificulta facilitar flujos de inversión que hagan posible la sostenibilidad y cobertura energética. Esto limita el alcance de proyectos de comunidades energéticas y si no logran generar un beneficio colectivo existe el riesgo de fragmentar el tejido social.
- **La sostenibilidad depende de acuerdos claros sobre operación y gestión comunitaria:** Más allá de la instalación de infraestructura, es clave definir cómo se gestionará y mantendrá a futuro con mecanismos claros de entrega, operación y sostenibilidad, con un rol articulador del Ministerio y la participación de actores privados y comunitarios.
- **La formación debe responder a las necesidades, prácticas y técnicas de las comunidades:** Se necesita implementar esfuerzos de capacitación con un enfoque práctico y técnico que fortalezca las capacidades locales y contribuya a la sostenibilidad de las soluciones.

A partir de las conclusiones del evento y el diálogo con actores clave, buscamos mapear las relaciones entre los actores en torno a la implementación de proyectos de acceso a la energía y desarrollo comunitario. Tomamos como punto de partida los actores y relaciones identificadas y usamos fuentes secundarias para explorar relaciones adicionales entre estos y otros actores para analizar patrones. Este ejercicio nos permitió identificar un total de 240 actores con 404 conexiones representados en el siguiente mapa de redes sociales (ver figura 1). Este mapa no busca ser exhaustivo dadas limitaciones de disponibilidad de información, el cubrimiento parcial de involucrados en las fuentes y a la escasa referencia específica de comunidades beneficiarias. Debido a estas limitaciones, acá sólo buscamos empezar a identificar tendencias generales sobre principales relaciones, incentivos y dinámicas del sistema. Aunque estas tendencias deben ser validadas y profundizadas con los actores protagonistas en el sistema, nos permiten identificar algunos temas relevantes para la conversación sobre el acceso a la energía y el desarrollo comunitario en la Guajira.

1.1. Cuello de botella 1: La débil descentralización lleva a la entrega de alivios momentáneos, no soluciones duraderas que empoderen a las comunidades

Gran parte de las iniciativas identificadas son desarrolladas por actores externos al territorio, lo que reduce el rol de las comunidades y autoridades locales a beneficiarios de las iniciativas sin oportunidades claras en la implementación de proyectos y arriesgando la apropiación local de los resultados de estos proyectos y la sostenibilidad de los mismos. De estos actores, 25% son públicos, 25% privados, 23% organizaciones internacionales, un 18% organizaciones ciudadanas, un 6% universidades y un 2% redes. Mientras que 50% son nacionales, un 31% Internacionales, un 12% regionales y un 8% locales.

El amplio rol de actores externos lleva a que la implementación de proyectos sea limitada en tiempos y productos, y que fuera de beneficios puntuales definidos usualmente desde afuera del territorio, como soluciones energéticas o capacitaciones, no hayan oportunidades claras para el desarrollo territorial. La voz y voto de actores locales tiende a limitarse a cómo se distribuyen beneficios o se acompaña la implementación de proyectos por actores externos, sin poseer información completa sobre lo que está ocurriendo y sin generar dinámicas para la integración de beneficios en los procesos de desarrollo local. Es importante notar que no ahondamos en proyectos financiados e implementados por gobiernos locales, esta es un área relevante de indagación.

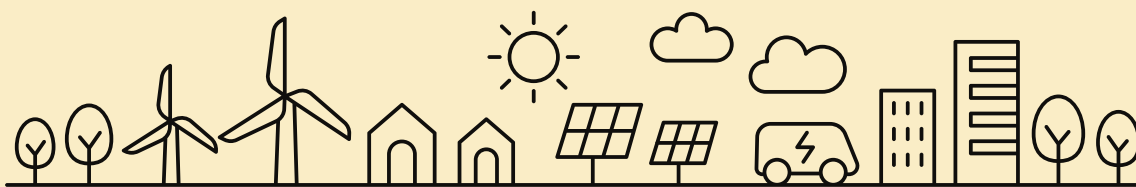


1.2. Cuello de botella 2: Prácticas que cierran puertas a nuevos actores y perpetúan el asistencialismo

El rol de actores externos al territorio también lleva a que sean sus prácticas, criterios y métodos los que primen a la hora de seleccionar implementadores de proyectos, definir formas de entrada al territorio, y asignar beneficios a la población. Al analizar las dinámicas de implementación de proyectos en el territorio vemos que la mayoría de relaciones entre actores son entre aquellos externos al territorio. Las relaciones más comunes son entre actores públicos (17%), entre actores públicos y privados (16%), públicos y organizaciones internacionales (9%), entre actores privados (8%) y entre privados y organizaciones internacionales (6%).

Esto lleva a qué se definan prioridades y se validen con actores locales, se seleccionen proveedores usualmente externos al territorio, y se definan criterios para el acceso a la oferta de apoyo que causan efectos adversos en la cohesión social local y aumentan la conflictividad. Estas dinámicas a su vez generan barreras de entrada altas para actores empresariales y organizaciones locales, lo que limita las posibilidades de construir capacidades y bases económicas locales y la contribución de los proyectos al desarrollo del territorio.

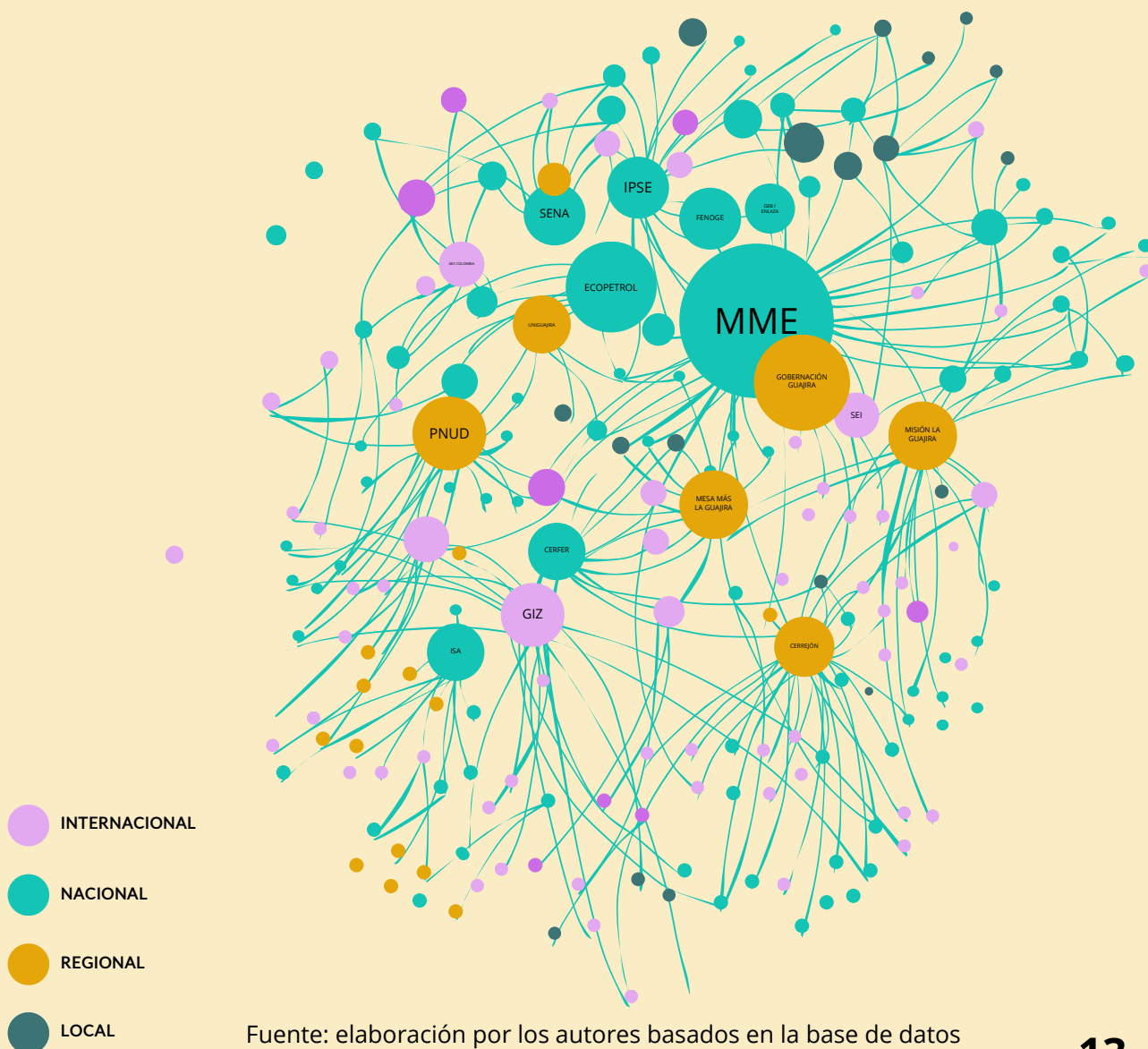
Existen diferentes explicaciones para esta situación que pueden ir desde: poca confianza en la capacidad de actores locales; o la priorización de la entrega de resultados sobre la dinamización de economías locales; los procesos de contratación que tienden a priorizar actores con capacidad financiera y experiencia técnica sobre actores en el territorio. Es importante notar que el problema es que existen escasos incentivos para implementar modelos innovadores y puede ser fácil reproducir lo que se ha hecho que arriesgarse a innovar probando procesos de contratación, nuevos modelos de acompañamiento y capacitación, o nuevos procesos de diseño e implementación de proyectos que estén encaminadas a la creación de incentivos y oportunidades para actores emergentes desde lo local. Si la asignación y distribución de recursos no generan dinámicas para la creación de oportunidades y capacidades locales, el cambio en el sistema y el desarrollo local se verán limitados.



1.3. Cuello de botella 3: Incentivos que aíslan y fragmentan la colaboración al favorecer el trabajo sectorial y las transacciones discretas.

Se identifican pocos espacios multiactor en el territorio. Sólo un 13% de relaciones ocurren en torno a estos espacios y estos espacios convocan principalmente a actores privados (5%), sector público (3%), y organizaciones internacionales (3%), con baja participación de organizaciones ciudadanas (1%) y academia (1%). Estos espacios tienden a ser movilizados por actores externos al contexto. Al analizar estas relaciones utilizando medidas de centralidad de red (Ver figura 2) se identifican grupos alrededor de tres grandes centros.

Figura 2. Mapa de redes sociales de relaciones entre actores clave en el acceso a la energía y el desarrollo comunitario en la Guajira según el nivel al que operan



Fuente: elaboración por los autores basados en la base de datos construida.

- Esfuerzos orientados a facilitar la entrada de proyectos de energía aumentando la oferta social en el territorio como el Comité Tripartito de Transición Energética en el que el gobierno facilita el diálogo con actores privados y comunitarios para alcanzar acuerdos que permitan el avance de proyectos.
- La coordinación entre empresas del sector privado para la implementación de proyectos sociales y de responsabilidad social empresarial como la mesa Más la Guajira que une 10 empresas y socios internacionales o Misión la Guajira, una iniciativa de grupo Aval, Promigas y Presidencia de la República.
- Finalmente, están proyectos de socios de desarrollo que aunque mantienen niveles de coordinación con el gobierno central avanzan en la implementación en el territorio como es el caso de GIZ, PNUD, OIT y Corea del Sur.

Estas colaboraciones son un paso importante, pero la separación evidente entre estas al llegar al territorio y su relación segmentada con actores locales, principalmente con los beneficiarios directos de los proyectos, dificultan la integración de los proyectos y sus resultados con alternativas de generación de ingresos y cadenas de valor locales. La ausencia de incentivos claros para colaboraciones multisectoriales y más allá de transacciones, a su vez dificultan la construcción de confianza entre actores y la conformación de relaciones con objetivos más amplios y de largo plazo que favorezcan la transformación gradual del sistema.



3. LA IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS MICHÍ KAI' EN URIBIA

El segundo abordaje que hicimos desde el proyecto fue enfocarnos en la implementación de comunidades energéticas en Uribia a partir del acompañamiento a dos comunidades Wayuu beneficiadas de la implementación de soluciones energéticas Michi Kai por parte del IPSE. Las comunidades que acompañamos fueron:

- **Coropontain**, comunidad Wayuu compuesta por cerca de 90 familias, 240 personas, de las cuales 11 fueron beneficiadas con acceso a la energía. La educación es una de las apuestas prioritarias de esta comunidad, con una institución que atiende hasta octavo grado con cerca de 95 estudiantes. La comunidad ha recibido inversión en infraestructura, entrega de aguas y sistema de almacenamiento y especies ovino-caprinas por parte del Cerrejón en el marco de la sentencia T-704. Las dinámicas económicas cotidianas son el tejido de artesanías que comercializan en Uribia y el pastoreo. Algunas personas trabajan en el área urbana por su proximidad al municipio.
- **Jiisentira**, esta comunidad está conformada por 61 familias, 220 personas, de las cuales 19 fueron beneficiarias de acceso a la energía. La comunidad cuenta con una cancha deportiva en la que han auspiciado eventos deportivos entre comunidades de la zona. Es centro de juegos tradicionales y celebraciones significativas en los meses de junio y diciembre, fortaleciendo su identidad colectiva y relaciones con otras comunidades. Cuentan con una escuela que atiende hasta quinto de primaria con capacidad para 50 niños. También han recibido beneficios en infraestructura comunitaria en el marco de la sentencia T-704. Se dedican a la producción artesanal, el pastoreo, la cría de gallinas, cultivo en huertas comunitarias y varios de sus integrantes trabajan en Uribia.



La iniciativa de comunidades energéticas a través de soluciones Michi Kai en Uribia buscaba contribuir a los resultados definidos por la política nacional de comunidades energéticas. Según la Metodología de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, el objetivo de la estrategia es “Garantizar la participación de comunidades en la cadena de valor de la energía, posibilitando puedan ser propietarias colectivas de la energía y/o de los medios para su generación, con sostenibilidad económica y ambiental (...) con el fin de democratizar la energía, aumentar la cobertura y contribuir a la reducción la pobreza energética.” Para esto, la estrategia plantea una serie de objetivos específicos que incluyen:

- Aumentar la cobertura y acceso al servicio de energía por las poblaciones vulnerables y la eficiencia energética mediante la proximidad del lugar de generación y consumo;
- Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios como gestores de las fuentes de energía renovables.
- Descentralizar la generación, almacenamiento y consumo de energía hacia las comunidades, especialmente las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
- Desarrollar la economía local y territorial.

Este modelo se resume en la figura 3, en donde se presenta cómo el IPSE, como encargado de electrificación en zonas no interconectadas, recibe el mandato del MME para implementar soluciones solares para beneficiar a comunidades Wayuu en Uribia. Luego de diseñar las soluciones y estructurar el proyecto, el IPSE procede a contratar a un implementador para la construcción y entrega de las soluciones energéticas y a implementar un proceso de acompañamiento a partir de la Escuela TEJ. Con esto se espera que las comunidades tengan acceso a la energía de 24 horas al día con fuentes renovables. Desde el diseño se planteó que las comunidades obtuvieran un acceso parcial a la energía, al incluir tres tipos de sistemas: micro redes para atender entre 15 a 25 usuarios; nanoredes para atender entre 8 a 12 usuarios; y soluciones individuales. Las autoridades comunitarias junto con los miembros de la comunidad se encargan de distribuir el acceso a la energía de un modo que permita la cercanía a infraestructuras comunitarias como escuelas y enramadas, y fomentar beneficios indirectos para otros miembros de la comunidad.

La política de comunidades energéticas (ver figura 3) busca empoderar a las comunidades al darles un rol protagonista en la administración, operación y mantenimiento de la solución energética y promover el uso de la energía para proyectos productivos que permitan a la comunidad aumentar sus ingresos y para fortalecer otros resultados de desarrollo como salud y educación. Para facilitar la sostenibilidad de los resultados se plantea la articulación de esfuerzos con otras entidades públicas, niveles de gobierno, actores privados y socios de desarrollo para fortalecer capacidades y apoyar procesos comunitarios.

Esta iniciativa se enfocó en la atención de las necesidades energéticas con especial atención a las características de dispersión de la población Wayuu. Para esto el IPSE contrató la entrega de 145 sistemas (32 individuales, 49 nano redes y 64 micro redes) con una inversión de cerca de 40.500.000 millones de pesos (approx. 10 millones de Dólares). En diciembre de 2024 se hizo la ceremonia de entrega de las soluciones energéticas y el IPSE reporta que se beneficiaron a 1344 usuarios en 59 comunidades energéticas participativas en las que se “capacita a los usuarios en el mantenimiento básico de sus sistemas, [se] promueve el uso eficiente y responsable de la energía, [se] desarrollan modelos de gestión comunitaria adaptados a las realidades locales, [y se] fomentan proyectos productivos que aprovechen la nueva disponibilidad energética”. Los principales resultados reportados son:

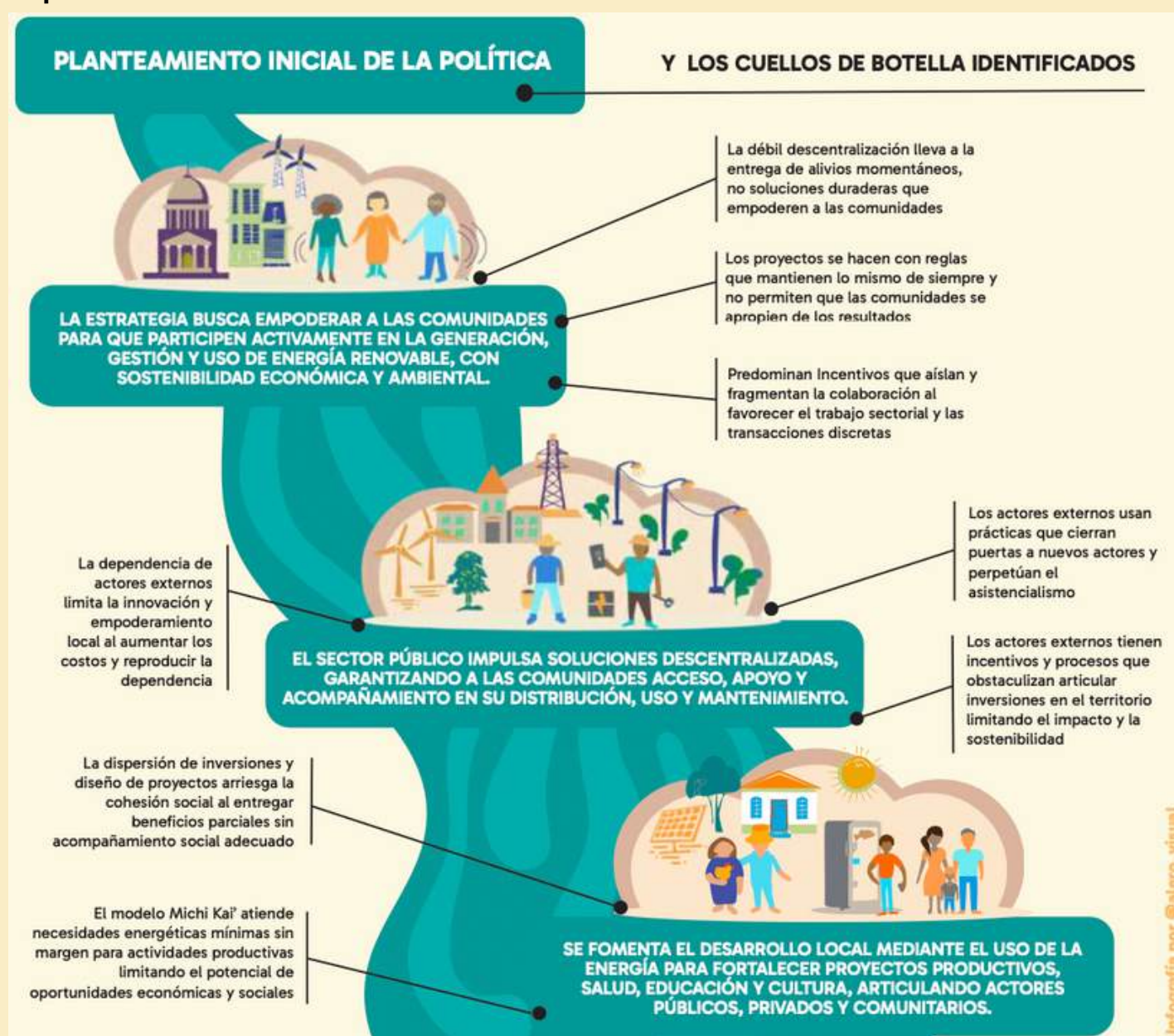
- “Mejoras sustanciales en la conservación de alimentos y medicamentos, reduciendo el desperdicio y mejorando la seguridad alimentaria y sanitaria.
- Surgimiento de nuevos emprendimientos locales que ahora generan ingresos adicionales para las familias wayúu.
- Fortalecimiento del sentido de comunidad y pertenencia, revitalizando manifestaciones culturales tradicionales en horarios antes imposibles.”

Dado el éxito reportado en Uribia, el IPSE avanza en replicar este modelo en el municipio de Manaure buscando beneficiar a 1334 hogares con una inversión planteada de 52.600.000 millones de pesos (Aprox. 13 millones de Dólares).



Desde nuestro acompañamiento a este piloto buscamos identificar desafíos para la implementación de comunidades energéticas y generar lecciones que permitan una mejora constante. Sin demeritar la entrega de beneficios a comunidades Wayuu, identificamos diferentes obstáculos que han tenido implicaciones para la forma y las prioridades de la implementación de la política de comunidades energéticas en la Guajira y han generado desviaciones del modelo planteado. Estos cuellos de botella se muestran en la figura 3 y en las siguientes páginas, incluyendo cómo contribuimos a abordarlos.

Figura 3. Políticas de comunidades energéticas y cuellos de botella en su implementación



3.1. Cuello de botella 4: Los proyectos se hacen con reglas que mantienen lo mismo de siempre y no permiten que las comunidades se apropien de los resultados.

Si bien la política de comunidades energéticas busca democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios como generadores y gestores de las fuentes de energía, en el caso de las Michi Kai solo se puede ver un avance parcial y limitado a este objetivo. El IPSE tiene dentro de su regulación (Artículo 1, Decreto 1371 de 2014) la obligación de mantener la posesión de la infraestructura de las soluciones energéticas entregadas, esto implica la generación de contratos de comodato para la operación, administración y mantenimiento de las soluciones energéticas por parte de empresas seleccionadas por procesos de licitación. Esto es una partida relevante de los lineamientos de la política dado que no se da entrega a las comunidades beneficiadas como dueños y actores clave en el manejo del sistema energético.

La necesidad de tener un operador ha sido comunicado a las comunidades por el IPSE y los contratistas. Para las comunidades con las que trabajamos, y otras consultadas, reportaron no tener claridad sobre esta nueva relación como los costos de la energía, los mecanismos para defender derechos de usuarios, y los compromisos de los operadores. Adicionalmente, demoras y dificultades en la selección y contratación de los operadores han llevado a que las comunidades deban pasar meses sin un acompañamiento adecuado para la provisión del servicio, con riesgo de daños a las soluciones y sin claridad de qué hacer en caso de fallas en los sistemas. Las comunidades son conscientes de la relevancia del pago por la energía, pero este obstáculo institucional los lleva a que ahora tengan que pagar una tarifa, por definir, a una empresa intermediaria, por seleccionar, quien tendrá propiedad de la solución energética ubicada en su territorio.

Desde el inicio de nuestra relación con las comunidades fueron evidentes las dudas que tenían sobre el acceso al servicio de energía y el modo en que esto afectaba su capacidad para hacer un uso responsable de la misma y tomar decisiones sobre inversiones en proyectos comunitarios (como la compra de refrigeradores o equipos para artesanías).

En respuesta a esto, buscamos facilitar el acceso a información y conversaciones con el IPSE y actores locales para aumentar el conocimiento de dinámicas, derechos y obligaciones en la relación usuario-proveedor de servicio. A través de metodologías participativas, ayudamos a identificar desafíos clave, co-diseñar soluciones con las comunidades y tratar de fortalecer capacidades locales para que las comunidades puedan asumir un rol activo y corresponsable en la gestión de la energía. Un líder comunitario se refirió a nuestro apoyo de la siguiente manera:

“Con estos apoyos del proyecto, y que recibimos en la asesoría, esto abre la mente para conocer que hay otras oportunidades (...) nos han dado el conocimiento, la luz, nos habla con claridad, y nos motivan para ver cómo podemos hablar de las necesidades” - Ricaurte Uriana. Autoridad tradicional Jiisentira, Uribia. La Guajira - Colombia.

Así, mientras la política busca democratizar la energía, el diseño institucional actual termina limitando la autonomía de las comunidades y perpetuando la dependencia de intermediarios.

3.2. Cuello de botella 5: La dependencia de actores externos limita la innovación y empoderamiento local y aumenta los costos y dependencias.

La implementación de comunidades energéticas contempló impartir la Escuela para la Transición Energética Justa (Escuela TEJ), un currículo que busca promover el fortalecimiento comunitario a través de “la reconstrucción de la memoria energética, el aprendizaje sobre fuentes renovables, la apropiación del sistema instalado, su gestión comunitaria y el diseño de proyectos productivos que integran la energía con el desarrollo local.” Esta escuela fue implementada en 2024 por el equipo social del IPSE en las comunidades beneficiadas adaptándola a la perspectiva de las comunidades Wayuu, pero sin incluir y clarificar el rol del operador externo del servicio. Como complemento de la escuela TEJ, los contratistas tenían la obligación de desarrollar cartillas (disponibles en Español y Wayuunaiki) y brindar capacitaciones para facilitar el entendimiento de los cuidados de la solución



energética, el pago de tarifas y los conocimientos necesarios para hacer un uso adecuado de la capacidad energética. El IPSE también estableció un convenio con FONPACÍFICO para el fortalecimiento de operadores y brindar capacitaciones a las comunidades sobre eficiencia energética.

A pesar de estos esfuerzos las comunidades nos han expresado que estas capacitaciones han sido limitadas y no les han permitido adquirir conocimientos y desarrollar capacidades para navegar los nuevos desafíos y oportunidades. Esto ha llevado a que incluso prefieran limitar el uso de energía al mínimo para evitar daños, aún en detrimento de proyectos productivos y otros beneficios de desarrollo en educación y salud.

En 2025 debido a cortes presupuestales y modificaciones en las prioridades de la implementación de comunidades energéticas no se continuó el acompañamiento social directo a las comunidades en Uribia. El proceso de selección de operadores por 10 años, que aún está en curso, incluye compromisos de estos para proveer 180 horas de capacitación a las comunidades sobre el manejo de las soluciones energéticas, la obligación de contratar a miembros de la comunidad para tareas básicas y el apoyo a proyectos productivos comunitarios.

Desde los diálogos iniciales con actores clave y comunidad en el territorio identificamos dificultades para proveer una oferta de capacitación adecuada a las necesidades y dinámicas Wayuu. A partir de esto hemos fomentado la articulación y diálogo entre estos actores y las entidades públicas a través de conversaciones y colaboraciones directas con actores como el SENA, CERFER, Ceiba, Transforma y la Alcaldía de Uribia. Esto ha llevado a compromisos de organizaciones y gestiones de la Alcaldía de Uribia para incluir a las comunidades en otros programas de capacitación en curso. Hemos compartido estas lecciones y facilitado el aprendizaje entre pares con miras a incidir en la política de comunidades energéticas y la implementación de nuevos proyectos. Frente a esto desde el IPSE nos han informado que “como aprendizaje y oportunidad de mejora, desde el equipo de Comunidades Energéticas haremos una "Cartilla" o guía a partir del documento propuesto de respuestas”, esto con el fin de informar el diálogo y acompañamiento a las comunidades en próximos proyectos.

En lugar de limitarse a traer capacitaciones externas, es necesario repensar cómo innovar en el acompañamiento a las comunidades. Esto implica crear oportunidades para que surjan y se fortalezcan actores locales capaces de liderar estos procesos y, de este modo, aumentar la eficacia, la respuesta a necesidades locales y disminuir los costos y la dependencia de actores foráneos. Los actores locales han expresado la necesidad de fomentar modelos de capacitación de capacitadores y otras formas de permitir a las comunidades pasar de ser receptores de capacitaciones a brindar las capacitaciones y ser agentes activos en el proceso de transformación territorial con la entrada de la energía.

3.3 Cuello de botella 6: Inversiones dispersas y diseño de proyectos de forma aislada arriesga la cohesión social.

El IPSE proyectó las Michi Kai como una forma de llevar la energía a un gran número de comunidades, aunque con beneficios limitados en cada una de estas por el número de usuarios y la distancia de los hogares a la solución energética. Tras una caracterización inicial de las comunidades se definió el tamaño y número de sistemas energéticos por comunidad, acordando con los líderes su ubicación estratégica en torno a infraestructura comunitaria como escuelas y enramadas (lugar de reunión tradicional Wayuú), así como algunos hogares priorizados. Es difícil balancear el objetivo de llegar a un importante número de comunidades con brindar un apoyo integral a cada comunidad.

Estas limitaciones en el beneficio de acceso a la energía han llevado a que las comunidades deban acordar esquemas de distribución de los beneficios directos e indirectos en unas dinámicas que aún no se han puesto a prueba frente al pago de tarifas. Como consecuencia, al interior de las comunidades se dan distintos niveles de apropiación y cuidado de las soluciones, con los beneficiarios directos fuertemente comprometidos, mientras que los beneficiarios indirectos cuestionan abiertamente las razones que los deberían motivar a cuidar la infraestructura o hacer un consumo responsable de la energía.

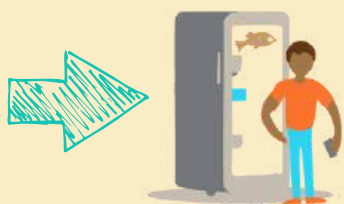


Este cuello de botella se ve ahondado debido a que aunque las comunidades están interesadas gestionar ampliaciones de usuarios cubiertos por medio de otros proyectos, estas no tienen claridad sobre los procesos necesarios. Dudan debido a que la solución será administrada por un operador externo y no tiene claridad sobre la posibilidad de gestionar ese aumento de capacidad y no conocen las implicaciones que este aumento de producción y consumo de energía pueda tener en las tarifas. Del mismo modo destacan que sus capacidades para conocer los mecanismos y procedimientos para la gestión de recursos para proyectos son una limitación para buscar soluciones a los problemas de capacidad y cobertura. Si bien puede entenderse la necesidad de priorizar escasos recursos en la implementación de programas de acceso a la energía y comunidades energéticas, es necesario tener esquemas de acompañamiento claros para facilitar la gestión de relaciones al interior de las comunidades y evitar generar disputas internas.

Desde las actividades desarrolladas con la comunidad ayudamos a fortalecer el rol de las autoridades tradicionales y transformar el tema de la falta de cobertura integral en la comunidad de una amenaza a la cohesión interna, a una desafío conjunto de la comunidad en la que la gestión y articulación con otros actores puede ayudar a resolver. Aunque no existen soluciones inmediatas a la problemática, empezamos a generar oportunidades que pueden aumentar la agencia de la comunidad al fomentar el diálogo interno, al desarrollar espacios para el intercambio de experiencias con otras comunidades y actores relevantes, y al apoyar a la comunidad para identificar de oportunidades de gestión de recursos y proyectos junto con la Alcaldía de Uribia.

3.4 Cuello de botella 7: Modelos energéticos mínimos, sin margen de acción para actividades productivas.

En el caso de las Michi Kai', la capacidad energética de los sistemas fue pensada para suplir necesidades básicas y atender una población dispersa, mientras que se lograba alcanzar el mayor número de beneficiarios con los recursos disponibles. La



implementación de las Michi Kai tuvo en cuenta la voz de los beneficiarios para el diseño final de las microredes incluyendo la priorización de usuarios a beneficiar e infraestructuras comunitarias a atender. Es innegable que estos sistemas energéticos han empezado a facilitar transformaciones positivas en las vidas de las comunidades, entre otros destacan:

- Profesores y trabajadores educativos destacan que la energía les permite mejorar la educación de los niños al imprimir materiales, innovar en el uso de metodologías lúdicas e incorporar tecnologías en las prácticas educativas.
- Las encargadas de la alimentación escolar reportan que usar licuadoras permite aprovechar mejor la fruta, pues ya no la tienen que machacar, y con esto la nutrición de niños. Otros destacan que las licuadoras les facilitan sus prácticas medicinales tradicionales, al poder licuar jugos y mejorar la refrigeración y gestión de alimentos.
- Las artesanas destacan que la iluminación en las noches les permite realizar actividades adicionales de producción y otros miembros de la comunidad reportan que les facilita realizar tareas del hogar y actividades de esparcimiento.
- Algunos beneficiarios directos reportan haber empezado a generar beneficios económicos al comprar congeladores o neveras para poder vender hielo y bebidas frías.

En el corazón de la política de comunidades energéticas está la promoción de la energía como medio para la dinamización y fortalecimiento de las economías populares. Pero la predefinición de capacidades energéticas y por ende el tipo y número de beneficiarios ha limitado el potencial beneficio del uso de la energía para propósitos diferentes al consumo básico. El potencial uso de la energía para facilitar el surgimiento de proyectos de economía popular que puedan convertirse en motor de desarrollo se ve limitado por que el sistema no tiene una capacidad que permita la conexión de aparatos de alto consumo, como máquinas de coser para potenciar la producción de artesanías o cocinas eléctricas para disminuir el consumo de leña. Aunque las comunidades agradecen y valoran el acceso a la energía, ven la necesidad de gestionar un aumento de la capacidad de sus sistemas y capacitaciones y acompañamiento en temas como el cooperativismo, técnicas de comercialización y gestión de proyectos, para realmente poder aprovechar la energía para la productividad.



3.5. Cuello de botella 8: Incentivos y procesos externos obstaculizan la articulación de inversiones y limitan el impacto y la sostenibilidad

El análisis inicial del sistema presentado en la sección 2 mostró la alta dispersión de esfuerzos en torno a la implementación de proyectos en la Guajira. En el acompañamiento a la implementación de las Michi Kai en comunidades en Uribia identificamos factores que limitan una articulación de esfuerzos institucionales y de socios de desarrollo efectiva que permita aprovechar el acceso comunitario a la energía por centenares de beneficiarios para contribuir al desarrollo del territorio y la creación de oportunidades locales. Esta falta de articulación dificulta la implementación de capacitaciones, acompañamiento en emprendimientos, y fortalecimiento comunitario para alcanzar resultados de desarrollo como mejora del acceso al agua, la educación o la provisión de servicios básicos de salud. Algunos de estos factores que dificultan la articulación para el desarrollo territorial son:

- El interés de mostrar resultados, aunque limitados, en un mayor número de comunidades. Lo que hace que se asuma que el proyecto de Michi Kai es el fin en sí mismo, una transacción a corto plazo para atender una necesidad y no una parte de un proceso a largo plazo para apoyar el desarrollo comunitario.
- El desconocimiento y limitado acceso de las comunidades a la oferta institucional local, regional y nacional, y de los procesos para gestionar proyectos lleva a que las comunidades pierdan oportunidades y vean limitada su agencia.
- Los obstáculos burocráticos para activar la oferta institucional implican costos de transacción y coordinación que en muchas ocasiones les es difícil superar a las comunidades. Por ejemplo, la necesidad de contar con un número mínimo de miembros de la comunidad para iniciar capacitaciones en energías renovables, cooperativismo y otros temas, llevan a que no se active la oferta a menos que un actor externo asegure la coordinación entre comunidades para alcanzar el número de participantes requerido.



- El pre-diseño de proyectos y modelos de implementación lleva a que en muchas ocasiones se deba partir de comunidades que cumplan con condiciones particulares y necesiten la oferta de los programas que llegan al territorio. Esto limita la coordinación entre esfuerzos pues cada actor prioriza la entrega de beneficios, usualmente utilizando proveedores de fuera del territorio, antes que la resultados sostenibles o el impulso a procesos territoriales.

La promoción del diálogo local en torno a la implementación de comunidades energéticas y sostenibilidad de las mismas nos permitió empezar a articular esfuerzos en los esfuerzos de actores potenciando complementariedades, por ejemplo, entre la Escuela AES y actores con oferta de capacitación, como la Universidad de la Guajira y Coomustier. Así mismo, comenzamos a abrir puertas para discusiones más amplias sobre la gobernanza y desarrollo territorial con actores privados, agencias públicas, ONGs y donantes. Fruto de esto fue realizar un encuentro sobre transición energética junto a la Alcaldía de Uribia y otros socios.

4. PROPUESTAS PARA FORTALECER EL ACCESO A LA ENERGÍA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA GUAJIRA

En este proyecto abordamos las dinámicas en torno a la implementación de políticas y programas en beneficio a comunidades, con énfasis en la entrega de sistemas energéticos Michi Kai. Utilizamos esta oportunidad para empezar a identificar factores que limitan y desincentivan colaboraciones efectivas y orientadas a resultados sostenibles, así como oportunidades para promover un cambio en el sistema que fomente el desarrollo territorial, empodere a las comunidades Wayuu, y facilite el avance a una transición energética justa.

En este proyecto abordamos las dinámicas en torno a la implementación de políticas y programas en beneficio a comunidades, con énfasis en la entrega de sistemas energéticos Michi Kai. Utilizamos esta oportunidad para empezar a identificar factores que limitan y desincentivan colaboraciones efectivas y orientadas a resultados sostenibles, así como oportunidades para promover un cambio en el sistema que fomente el desarrollo territorial, empodere a las comunidades Wayuu, y facilite el avance a una transición energética justa.

Los hallazgos nos permiten analizar que el funcionamiento del sistema en torno a la transición energética y desarrollo comunitario en la Guajira tiene un funcionamiento centrado en transacciones discretas que priorizan resultados en el corto plazo. Este tipo de sistemas tienden a requerir una gran cantidad de inversión para mantener su funcionamiento, se basan en una lógica de negociación constante para balancear ofertas y beneficios a lo largo del tiempo, dificultan la construcción de confianza y requieren el uso constante de mecanismos externos, cómo el poder judicial o la coerción, para la resolución de conflictos y avance en procesos y proyectos.

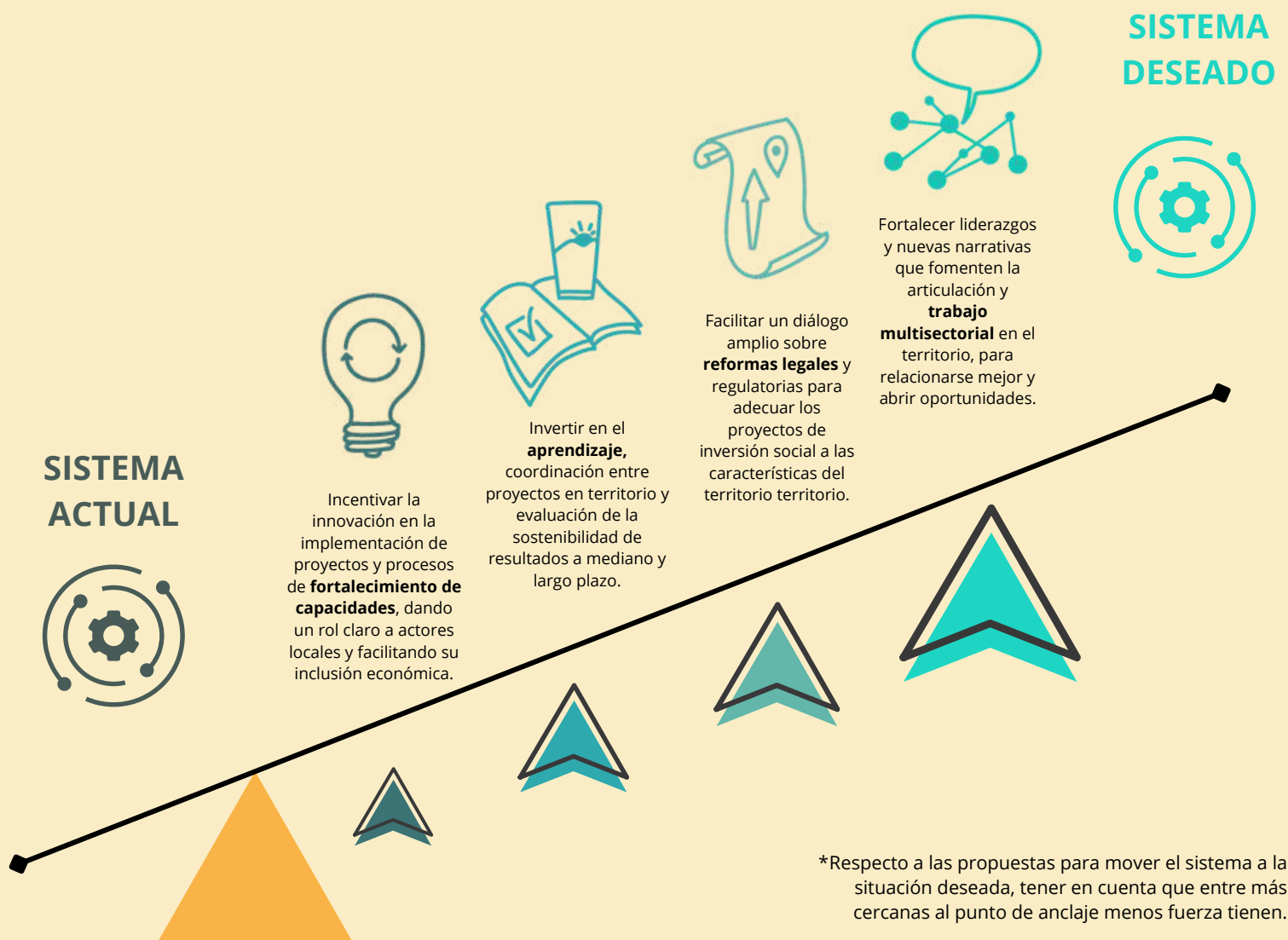
Desde nuestra experiencia, **transformar el funcionamiento del sistema es posible si se toman pasos que a partir de priorizar la construcción de relaciones y confianza faciliten la identificación y movilización de incentivos compartidos** (o al menos complementarios) que respondan a la realidad del territorio y generen oportunidades concretas para la generación de beneficios económicos y sociales a nivel local. Una apuesta de este tipo puede tomar puede generar un entorno propicio para el desarrollo territorial y el protagonismo de los Guajiros en el aprovechamiento del potencial territorial para una transición energética justa.

En la Figura 4, así como en las siguientes páginas, proponemos una serie de propuestas para avanzar en la transformación de las dinámicas y resultados del sistema en La Guajira. Para esto nos basamos en la aproximación de puntos de apalancamiento para el cambio sistémico (Meadows, 1999), proponiendo puntos en los cuales **la introducción de pequeños cambios pueden contribuir a grandes cambios**.

En estos puntos de apalancamiento encontramos cambios en los que es más sencillo avanzar aunque tienen menor potencial de impacto (lado derecho de la figura 4) y puntos que pueden tener mayor potencial de impacto pero a la vez son más difíciles de alcanzar, toman mayor inversión y tienden a encontrar con mayor resistencia (lado izquierdo de la figura 4). Dada nuestra posición como una colaboración entre actores dentro y fuera del sistema, reconocemos la importancia de un diálogo amplio territorial en torno a los desafíos que enfrenta el sistema y los factores que bloquean el cambio. Esperamos contribuir a facilitar este diálogo para movernos de la situación actual del sistema a uno que incentive colaboraciones, facilite procesos, fomente nuevas ideas y abra oportunidades de desarrollo territorial.

Figura 4. Propuestas para apalancar el cambio sistémico en torno a la transición energética en la Guajira

Situación deseada: Un sistema enfocado en la construcción de relaciones entre actores que facilitan el diálogo para el encuentro de incentivos complementarios y comunes que favorecen la construcción de confianza y promueven el cambio de intercambios basados en transacciones discretas para la creación de oportunidades y apropiación local del desarrollo en el territorio.



Situación actual: Sistema transaccional que prioriza las interacciones discretas y entrega resultados a corto plazo, reforzando y multiplicando las negociaciones sobre el tamaño de los beneficios entregados y dificultando la construcción de confianza.

4.1 Incentivar la innovación en la implementación de proyectos y procesos de fortalecimiento de capacidades, dando un rol claro a actores locales y facilitando su inclusión económica.

Tanto los proyectos Michi Kai como en los proyectos identificados, vemos que se prioriza la entrega de beneficios específicos parciales a un alto número de comunidades y son prioritarias las preocupaciones por la forma en la que la comunidad se organizará y hará sostenibles estos beneficios en el tiempo. Esta forma de implementación de proyectos es comprensible dado que responde a metodologías pre-establecidas, permite obtener réditos políticos y es consecuente con las lógicas de interacción transaccional en el sistema, pero difícilmente llevan a resultados sostenibles o contribuyen a transformar relaciones locales.

Para la transformación de estos modelos es necesario generar incentivos para la innovación orientada a: la priorización del desarrollo local a partir de oportunidades de ingresos y autosuficiencia para las comunidades; el fortalecimiento de actores locales que tengan capacidades y oportunidades para ser agentes de cambio en el fortalecimiento de capacidades y la gestión de proyectos; y la priorización de proyectos que lleven a resultados sostenibles más allá de la entrega de beneficios puntuales.

En el proyecto identificamos 4 experiencias de cambio con potencial para la transformación del sistema:

- Pasar de modelos que priorizan la entrega de beneficios a modelos que usan la entrega de beneficios como una forma de aumentar la agencia local, fortalecer relaciones de las comunidades y generar nuevas oportunidades. Una iniciativa probando modelos de esta forma es la promovida por PNUD y FAO que facilita el acceso al agua y su uso para agricultura comunitaria.
- Pasar de implementar modelos prediseñados para entregar beneficios al involucramiento con las comunidades para entender los problemas y co-crear soluciones. Un ejemplo de esto es el trabajo de la Universidad de la Guajira en el que se relacionan previamente con las comunidades para el diseño de proyectos y gestión de recursos para decidir qué, cómo y con quién implementar.

- Pasar de proyectos delimitados a entregar beneficios discretos a promover capacidades, agencia y gestión de proyectos en colaboración con comunidades. La Academia AES ha venido probando esta aproximación con miras a promover procesos sostenibles con las comunidades. Otro ejemplo es el trabajo de la Fundación Hilo Sagrado en un acompañamiento sostenido al desarrollo comunitario alrededor de las artesanías.
- Pasar de pensar en el modo más eficiente de implementar proyectos que entregan beneficios de un modo transaccional, a explorar métodos de implementación que abran oportunidades y fortalezcan las capacidades, autoorganización y agencia local para que actores en el territorio puedan aprovechar oportunidades económicas y de desarrollo.

4.2 Invertir en el aprendizaje, coordinación entre proyectos en territorio y evaluación de la sostenibilidad de resultados a mediano y largo plazo.

La documentación de proyectos y resultados en el apoyo a comunidades en la Guajira ha priorizado los anuncios de iniciativas propuestas y la comunicación de beneficios entregados, con escasa inversión en entender y mejorar el diseño, los procesos, la interacción con las comunidades y el entendimiento de resultados más allá de los beneficios entregados. Esto en buena medida es producto del funcionamiento del sistema y el énfasis en transacciones discretas sobre la construcción de relaciones y confianza. Por ejemplo, aunque hay interés de diferentes actores en mejorar el diálogo intercultural, las iniciativas relacionadas tienden a enfocarse en las prioridades sectoriales, como aquellas del sector público, de las empresas en el territorio, o de las prácticas alrededor de la consulta previa. Sólo pudimos identificar una documentación del proceso y aprendizaje de experiencias de diálogo alrededor del Pacto por la Yanama.

Estos problemas y la limitada inversión en aprendizaje, el intercambio de experiencias y la mejora continua de procesos, limitan el impacto. Esto redunda en la limitada coordinación, complementariedad y sostenimiento de procesos con liderazgos locales. Abordar la debilidad de los flujos de información y bajos incentivos para el intercambio de conocimiento puede permitir empezar a generar círculos virtuosos que aumenten capacidades y oportunidades locales, y así la agencia de los diferentes actores del territorio.

Cuatro **puntos de entrada para transformar incentivos para la sistematización de aprendizajes y abrir oportunidades** para el intercambio de experiencias y la mejora continua de proyectos para fortalecer el desarrollo local parten de promover cambios:

- De desatascar beneficios a comprender e innovar en torno a la generación de resultados a mediano y largo plazo
- De mostrar resultados entregados a entender y mejorar procesos
- De analizar proyectos aislados a entender la contribución territorial de las inversiones.
- De priorizar agendas nacionales, priorizar las locales.

4.3 Facilitar un diálogo amplio sobre reformas legales y regulatorias para adecuar los proyectos de inversión social a las características del territorio

El marco legal y regulatorio nacional crea limitaciones e incentiva relaciones transaccionales de corto plazo que refuerzan las dinámicas del sistema actual, en lugar de facilitar la transformación del territorio. Este marco institucional tiene limitaciones clave para la implementación de procesos territoriales, para elevar la voz y propuestas de actores comunitarios y autoridades locales, así como abrir oportunidades para que estos tengan un rol activo en el diseño e implementación de proyectos. Con falencias claras, el gobierno actual ha intentado avanzar en iniciativas como el decreto para atender la emergencia en la Guajira o la reciente promesa de institucionalizar el diálogo tripartita entre gobierno, empresas y comunidades.

Antes que institucionalizar un espacio de multiactor o determinar formas de facilitar la acción del gobierno central en el territorio, puede ser importante fomentar diálogos en el territorio que permitan generar propuestas para adaptar la protección de derechos, la implementación de proyectos y dinamización de inversiones a dinámicas y procesos tradicionales locales. Así es posible avanzar procesos de incidencia para la producción de decretos o propuestas legislativas puntuales que permitan cambiar la aplicación de reglas territoriales y facilitar la innovación, el desarrollo de prácticas que faciliten las relaciones locales y que adecuen la implementación de proyectos a las prácticas locales y la dispersión de la población.

4.4 Fortalecer liderazgos y nuevas narrativas que fomenten la articulación y trabajo multisectorial en el territorio, para relacionarse mejor y abrir oportunidades.

Cómo se destacó en los hallazgos los espacios de colaboración multiactor que se identificaron están o enfocados en problemas puntuales, cómo la habilitación de inversiones en proyectos energéticos, o guiados por iniciativas sectoriales. Aunque estos espacios son un inicio para la colaboración en el territorio la segmentación de los mismos y la primacía de metas y mecanismos de implementación sectorial limitan su contribución al cambio de las dinámicas transaccionales del sistema y a la construcción de relaciones en torno a objetivos comunes e iniciativas que sostenibles en el tiempo. **Es importante reconocer que los actores con quienes interactuamos son conscientes de la necesidad y utilidad de espacios multiactor**, pero a la vez son escépticos pues han visto resultados limitados en las experiencias que han tenido tanto en la participación en espacios multiactor como en intentos de colaboraciones discretas en torno a proyectos. Las experiencias de los actores hacen que no haya incentivos claros, ni capacidad financiera, para invertir en fomentar y sostener colaboraciones multiactor.

Para pensar en el cambio es importante reconocer las dinámicas de los espacios existentes y las experiencias de los actores. Proponer ahondar espacios existentes o iniciar procesos amplios de colaboración puede no ser el mejor camino, haciendo relevante explorar procesos graduales que faciliten la identificación o creación de narrativas multiactor que puedan hagan evidente el valor de nuevas dinámicas de relaciones y desarrollo territorial para el avance de los objetivos de los actores clave. A partir de estas narrativas y su diseminación entre los actores es posible empezar procesos graduales que muestren que la colaboración no sólo es posible, sino que puede dar resultados. Un proceso de este tipo puede implementarse gradualmente empezando con la construcción de confianza a través del entendimiento multisectorial de un desafío sentido en el territorio, la co-creación de soluciones específicas y la prueba de nuevos modelos de implementación que permitan la contribución activa de diferentes tipos de actores. Este proceso debe superar una lógica de “piloto”, y buscar la comunicación y el diálogo a partir del avance en el proceso para involucrar nuevos actores y dialogar directamente con las dudas y reticencias que actualmente existen en el territorio.

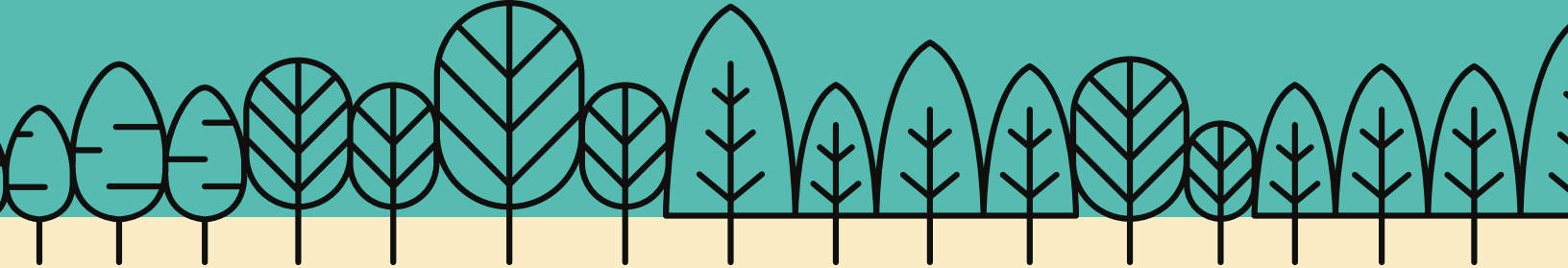
Adicionalmente, es importante identificar fuentes de financiación o cofinanciación externas al territorio que puedan absorber el riesgo de iniciar y sostener el proceso, así como una perspectiva externa que facilite a los actores en el territorio empoderarse, construir confianza y llegar a ver resultados que permitan la movilización de recursos locales.

CONCLUSIÓN

Los cambios con mayor potencial de impactos sostenibles a largo plazo, son los cambios en la forma en la que pensamos sobre los objetivos, los desafíos y las formas de abordar los problemas del sistema. Transformar la mentalidad puede ser el más costoso en términos de tiempo, pero puede llevar a la formación de nuevos acuerdos, la inclusión de voces, el posicionamiento de nuevas ideas y el cambio de incentivos y comportamientos para el trabajo de los actores. Sin embargo hay algunas acciones que pueden ayudar a facilitar y acelerar el proceso como:

- Cambiar el debate público sobre la entrega de beneficios a priorizar el logro de resultados
- Fortalecer experiencias locales que difieren del funcionamiento actual del sistema (como las destacadas en la propuesta 4.2) generando evidencia de valor y viabilidad del cambio
- Abrir oportunidades para la experimentación multisectorial en respuesta a desafíos concretos a partir del fortalecimiento y creación de oportunidades para actores locales que puedan ser protagonistas de la implementación.

En general, la transición está lista en papel y voluntad, pero necesita desbloquear los “cuellos de ejecución” para aterrizar en el territorio. Transformar el sistema requiere pasar de relaciones transaccionales a colaboraciones de confianza, que fortalezcan capacidades locales, integren proyectos con desarrollo territorial y hagan de las comunidades protagonistas de una transición energética justa.



Este trabajo es el resultado del aprendizaje colectivo entre comunidades, instituciones y aliados comprometidos con la construcción de un modelo participativo de desarrollo energético en La Guajira.



Con el apoyo de:



www.governanceactionhub.org